

Claroscuros de la paridad en la LXIII Legislatura: De los cambios cuantitativos al ejercicio legislativo

FLOR ANGELI VIEYRA VÁZQUEZ¹

RESUMEN

En México se ha visto cómo el incremento paulatino de la participación política formal de las mujeres favorece la construcción de un régimen democrático, no obstante, las condiciones desiguales para acceder y ejercer dicha participación en los tres niveles de gobierno -Federal, Estatal y Municipal- y en los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- obliga a cuestionar y evidenciar dónde se inscriben las desigualdades en la garantía de derechos políticos-electorales entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, poner de manifiesto las deficiencias del régimen democrático en cuanto a la igualdad constitucional.

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la paridad a puestos de elección popular, cuya implementación por primera vez en México ocurrió en las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015. El análisis responde a los siguientes aspectos: a) La modificación cuantitativa entre las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Diputados; b) La influencia del sistema electoral mexicano en la asignación de lugares para las mujeres a partir de los principios de mayoría relativa y representación proporcional; y c) La presencia de las legisladoras en las comisiones.

La paridad representa un nuevo punto de partida para continuar la exigencia en el cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, sin embargo, uno de sus desafíos se encuentra en el ejercicio legislativo.

PALABRAS CLAVE: Democracia constitucional, paridad electoral, sistema electoral, ejercicio legislativo y género.

¹ Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Asistente de investigación del Área: “Mujer, Identidad y Poder” del Departamento de Política y Cultura de la UAM-X. Correo Electrónico: angeli_vieyra@hotmail.com

Contrasts of parity in the LXIII Legislature. From quantitative changes to the legislative practice

ABSTRACT:

In Mexico has been seen how the gradual increase of formal political involvement of women, favors the edification of a democratic regime, nevertheless, the unequal conditions to access and practice such participation in the three government levels -Federal, State, Municipal- and in the three powers –Executive, Legislative and Judiciary- obliges to question and show where inequality resides in the guaranteeing political-electoral rights between men and women and, at the same time, to highlight the deficiency of the democratic regime in terms of equality and constitution.

Therefore, this research aims to analyze the impact of parity on popular election positions, whose implementation for the first time in Mexico occurred on the midterm elections of June 7th of 2015. The analysis responds to the following subjects: a) The quantitative modification between the LXII and LXIII deputies chamber legislations; b) The influence of the Mexican electoral system on the allocation of places for women based on the principles of relative majority and representation; and c) The presence of women legislators in the commissions.

Parity represents a new starting point for continuing demanding the equality of women political-electoral rights as to men, as such, one of the challenges resides also on the legislative exercise.

KEY WORDS: Constitutional democracy, electoral parity, electoral system, legislative practice and gender.

INTRODUCCIÓN

El incremento paulatino de la participación política formal de las mujeres en México ha favorecido la construcción de una forma de gobierno presumiblemente democrática porque abrió los espacios de participación política para las mujeres, no obstante, persisten condiciones sociales desiguales que dificultan el acceso y el ejercicio de dicha participación en los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).² De esta idea, surge el cuestionamiento sobre la menor presencia de mujeres en los espacios de decisión y de participación política nacional al querer explicar dónde están inscritas las desigualdades en la garantía de los derechos políticos entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, poner de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema democrático en cuanto a la igualdad constitucional.

La presente investigación busca cuestionar la relación entre la democracia constitucional mexicana y la materialización de uno de los derechos políticos de las mujeres inherente a esta forma de gobierno: su derecho a ser votadas. Para tal cometido, se analizarán los efectos de implementación de las denominadas acciones afirmativas,³ mismas que a partir de la reforma político electoral de 2014 dieron paso a la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas para diputaciones (locales y federales) y senadurías. Así mismo, se examinará la desigualdad respecto a la integración de las comisiones al interior de la Cámara de diputados.

Existen valiosas investigaciones que han analizado la participación política formal de las mujeres desde su aspecto teórico y procedimental. Algunas teóricas feministas latinoamericanas como Ana María Fernández Poncela (1995, 2003, 2011), Silvia García Fajardo (2011), María Luisa Tarrés (2011), Marta Torres Falcón (2012), Esperanza Palma (2012, 2014), Nérida Archenti y María Inés Tula (2008, 2014), entre otras, en sus análisis

² Datos proporcionados por el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman la existencia de condiciones económicas, políticas y culturales que coadyuvan a una participación política formal desigual entre mujeres y hombres. Disponible en http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ (20/06/2017).

³ Con base en el Art. 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), se sugiere que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que tienen como finalidad acelerar la igualdad de facto, de oportunidad y de trato entre el hombre y la mujer, mismas que cesarán cuando dicha igualdad se haya alcanzado. Disponible en <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm> (2/07/2017).

sobre cuotas de género, solían concluir que entre los retos más importantes a nivel jurídico que favorecería la presencia de mujeres en los puestos de elección popular se encontraban: sancionar a los partidos políticos que incumplieran con las cuotas y transitar hacia la paridad electoral. Por ello, en esta investigación se mostrará, que la llegada de la paridad jurídico-electoral ha sido un avance legal importante, sin embargo, algunos de sus desafíos se encuentran en el sistema electoral y en el ejercicio legislativo.

La necesidad de una ley que garantice igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos revela una ambivalencia en nuestro sistema democrático porque, por un lado se manifiesta el avance en el proceso de medidas legales que acercan a las mujeres en igualdad jurídica con los hombres, pero, por el otro lado, también se hace visible el peso de las estructuras de género para ejercer la ciudadanía, donde, a pesar de las leyes y de la lucha política para que las mujeres accedan al espacio político, éste se mantiene como un lugar privilegiado, indiscutible e incuestionable para que sea ocupado por los hombres.

Por lo anterior, en esta investigación se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el vínculo entre la democracia constitucional mexicana y la garantía de las mujeres a su derecho político de ser votadas? ¿Cómo incidió cuantitativamente la paridad electoral en las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015 en el ámbito federal? ¿Cómo influye el sistema electoral mexicano en la asignación de lugares para mujeres por los principios de mayoría relativa y representación proporcional a partir de la paridad electoral? Y ¿Qué lugares ocupan las mujeres en las comisiones de la Cámara de Diputados Federal?

En México, puede afirmarse que existe una “democracia aparente”⁴ porque a pesar de que los derechos políticos de las mujeres se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso, dicha ley refiere a una igualdad entre mujeres y hombres, en la práctica desafortunadamente estos derechos no están plenamente garantizados en todos los casos. La dimensión sociopolítica, es decir, la dimensión fáctica de la democracia constitucional, pone de manifiesto que a pesar de los esfuerzos y avances

⁴ El concepto de democracia aparente se retoma de Michelangelo Bovero quien lo utiliza para hacer referencia a aquellas democracias donde el juego político se desarrolla o parece desarrollarse según las reglas democráticas, pero adolece de alguno de sus elementos prescriptivos para su correcto funcionamiento. Véase: Pedro Salazar. 2013. *La democracia constitucional. Una radiografía teórica*, FCE-III-UNAM, México.

jurídico-electoral, las mujeres se enfrentan a otras barreras inscritas en la cultura política androcrática⁵ que privilegia el acceso de los hombres en los puestos de participación política formal, así como en el andamiaje institucional del Estado, estas características manifiestan el peso de las estructuras de género⁶ en los distintos espacios de la vida social.

Desde luego, mi realismo político como politóloga feminista me impide sugerir respuestas mágicas para superar la siempre endeble democracia existente, por el contrario, mi intención radica en hacer una crítica a la existente democracia constitucional, confiando en su posible perfectibilidad en beneficio de las mujeres.

⁵ Utilizo el término androcrática(o) en el mismo sentido que Carol Pateman lo emplea para señalar que la política, como muchos otros espacios de la vida social, permanecen organizados, dominados y/o privilegiados por los hombres. Ver: Carole Pateman. 1996. *Críticas feministas a la dicotomía público/privado*, Paidós, Barcelona.

⁶ Siguiendo a Joan Scott entiendo por género una categoría de análisis constitutiva de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es al mismo tiempo, una forma primaria de relaciones significantes de poder. Véase: Marta Lamas. 2013. *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*, UNAM-PUEG-Porrúa, México, pp. 265-302.

1. ¿QUÉ ENTENDER POR DEMOCRACIA?

Al reflexionar sobre la democracia, es preciso desentrañar la diferencia entre lo descriptivo y lo prescriptivo. En un contexto como el mexicano con prevalencia por el desencanto sobre la democracia,⁷ resulta necesario discutir y re-pensar qué es y qué se entiende por democracia. También es importante diferenciar qué tipo de democracia es posible en nuestro país (con sus avances y sus pendientes) y qué tipo de democracia es la deseable, pues la brecha entre ambas ha favorecido la desconfianza y el descontento con esta forma de gobierno.

Debido a la diversidad y la heterogeneidad de las sociedades, resulta inaceptable esperar que la democracia resuelva de una vez y para siempre las necesidades y los intereses económicos, políticos y sociales de todas las personas, pero al mismo tiempo es también inadmisible asumir que una sociedad es democrática cuando las desigualdades son constantes y abismales entre unas y otros. No obstante, considero que la permanencia de esta forma de gobierno en el tiempo se debe, como históricamente se ha mostrado, a que parece ser el modelo más prometedor para institucionalizar el conflicto humano y permitir la convivencia de una irremediable y conflictiva pluralidad de conciencias, con la finalidad de posibilitar en condiciones de igualdad, el ejercicio de los derechos de libertad, políticos y sociales de todas las personas.

La recurrente frase citada sobre la democracia como “El poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”⁸ no es más que un ideal demostrado históricamente, no sólo en México sino en todos aquellos países adscritos a dicho régimen político, pues el poder está a cargo de una élite, de una minoría que tiene en su control el poder de cambiar las formas de acceder y de ejercer el poder político en representación de una pluralidad de individuos.

Por lo tanto, las democracias actuales son y sólo pueden ser representativas porque los y las ciudadanas que constituyen el pueblo eligen a quienes se encargarán de legislar y

⁷ Con base en el Latinobarómetro 2015 y los resultados sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en México, 1200 personas fueron entrevistadas, 41.5 % se encontraba no muy satisfecho mientras que 36.6 % se encontraba nada satisfecho. En contraste, sólo 3.8 % se encontraba muy satisfecho. Disponible en <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (5/07/2017).

⁸ Gustavo Ernesto Emmerich y Alejandro Favela Gavia señalan que esa frase dicha por Abraham Lincoln evoca al democratismo radical. Cfr. Gustavo Ernesto y Alejandro Favela. 2007. “Democracia v/s autoritarismo”, en *Tratado de Ciencia Política*, Anthropos-UAMI, México, p. 114.

gobernar, por tanto, no ejercen de forma directa esas facultades, de ahí que la democracia directa sólo sea parte de la historia de la Antigua Grecia, pero no una posibilidad real en las sociedades existentes.⁹

A partir de las teorías políticas modernas, particularmente de aquellas que se caracterizan por anteponer al individuo frente al Estado, se ha configurado a este último como un medio para tutelar los derechos de las personas, dando paso a la construcción de democracias liberales y garantistas, de tal suerte que la protección de los derechos fundamentales por medio del Estado de Derecho se convierta en un límite del poder político.

En este sentido, los derechos fundamentales individuales representan aquello sobre lo que no tiene poder el poder político ya que le está prohibido tomar decisiones que lesionen o nieguen estos derechos, al mismo tiempo, el Estado se encuentra obligado a asegurar el disfrute de los mismos por parte de todos los individuos. A su vez, el poder político ejercido democráticamente y en cuya base se encuentra la defensa de los derechos fundamentales es entendido como el fundamento del Estado, esto significa que aquellas decisiones colectivas tomadas a través del principio de mayoría, pero que reconocen y garantizan los derechos de las minorías, constituyen el principio de obligatoriedad política del Estado de Derecho.

En suma, la democracia moderna¹⁰ es un conjunto de reglas que establece quién o quiénes y cómo deben tomarse las decisiones colectivas, es decir, aquel o aquellos que están autorizados para decidir y los pasos que deben seguir para hacerlo, cuyos elementos mínimos, siguiendo a Norberto Bobbio, son los siguientes:

- 1) todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, religión, condición económica y sexo, deben disfrutar de derechos políticos, es decir, cada uno debe disfrutar del derecho de expresar la propia opinión y de elegir a quien la exprese por él; 2) el voto de los ciudadanos debe tener el mismo peso; 3) todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para poder votar

⁹ Para una discusión más amplia sobre los ideales y realidades democráticas. Cfr. Luis Salazar. 2007. *Educación. Discriminación y tolerancia*, Alianza, México.

¹⁰ Para un debate más amplio sobre el origen y evolución de la democracia y la comparación entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, véase: Norberto Bobbio. 2009. *Teoría general de la política*, Trotta, Madrid, pp. 401-417.

según la propia opinión, formada lo más libremente posible, en una competición libre entre grupos políticos organizados, en concurrencia entre ellos; 4) deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en la condición de elegir entre soluciones diversas, es decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos; 5) tanto para las elecciones como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electa o se considere válida la decisión que obtenga el mayor número de votos; 6) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones (Bobbio, 2009: 460).

Las dos primeras reglas establecen las condiciones de la igualdad democrática: a) *condición de inclusión* (toda la ciudadanía, sin distinción alguna deben gozar del derecho-poder de contribuir a las decisiones colectivas); b) *condición de equidad* (todos los votos deben valer por igual). Las siguientes dos reglas establecen las condiciones de libertad democrática: c) *pluralismo informativo* (sin el cual las opiniones políticas de los ciudadanos pueden manipularse); d) *pluralismo político* (los ciudadanos deben poder elegir entre distintas alternativas reales). La quinta regla representa la regla de la mayoría, es e) una *condición de eficiencia de la democracia* (permite llegar más fácilmente a la decisión colectiva frente a la heterogeneidad de opiniones individuales). Finalmente, la sexta regla es una: f) *condición de salvaguardia o de supervivencia* de la democracia (es una limitación al propio poder de la mayoría) (Salazar, 2013: 33-34).

Como puede apreciarse, para los intereses de esta investigación, el primer inciso resulta medular en la comprensión de la importante lucha de las mujeres con respecto de sus derechos políticos en igualdad de condiciones con los hombres: en primer lugar, porque es su derecho reconocido constitucionalmente y, en segundo lugar, porque, en tanto no sea garantizado, no puede sugerirse la existencia de un sistema democrático constitucional consolidado dado que es incapaz de cumplir la primera regla que corresponde al disfrute de los derechos políticos. En consecuencia, la unión entre democracia y constitucionalismo aparecen como una mutua necesidad.

En suma, y con base en lo expuesto, por democracia entiendo un tipo de sistema político que establece las reglas de quién y cómo gobernar y, además, garantiza la

igualdad política entre sus ciudadanas y ciudadanos para que elijan a sus representantes y gobernantes. Sin embargo, para que dicha igualdad política sea posible, será necesario cumplir con ciertas precondiciones (algunos derechos fundamentales: derechos de libertad y derechos sociales)¹¹ para que el ejercicio de los derechos políticos y, por tanto, el ejercicio de la ciudadanía entre mujeres y hombres no se encuentre en condiciones de desigualdad

La lucha por los derechos de las mujeres (sean estos de libertad, políticos o sociales), no son recientes, tienen su fundamento en los múltiples movimientos feministas. La democracia todavía tiene deudas pendientes con respecto de los derechos políticos de las mujeres, como lo señala Ana Lau Jaiven “seguimos reclamando el derecho a tener derechos” (Lau, 2011: 53), sin embargo, como sugiere Anne Phillips, la democracia puede potenciarse en beneficio de las mujeres, des-construyendo sus elementos inherentes del enfoque liberal (Phillips, 1996: 31).

2. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: DEL DERECHO A SER VOTADAS AL EJERCICIO LEGISLATIVO

La democracia constitucional es un modelo de organización político-jurídica que tiene dos objetivos: limitar el poder político y distribuirlo entre las y los ciudadanos (Salazar, 2013: 45), de tal suerte que, para alcanzar dichos objetivos, combina al constitucionalismo y la democracia en tanto sistemas conceptuales.

Dicho modelo reaparece como una alternativa frente al desolador escenario que dejó la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el marco de referencia para los documentos internacionales que aspiraban a una paz mundial, como: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal

¹¹ Michelangelo Bovero señala que ciertos derechos se establecen como fundamentales en tanto (en el sentido que) son aquellos que “dan fundamento” a la totalidad de un sistema de convivencia; si se extraen o se lesionan, una cierta forma de convivencia entra en crisis. Los derechos se presentan como las condiciones sustanciales de legitimidad de los propios poderes. Señala que desde la perspectiva de Bobbio los derechos fundamentales son “anteriores a los deberes” son aquellos que el individuo como tal puede reivindicar *frente* o *contra* a la colectividad y al poder que la gobierna. Véase: Michelangelo Bovero. 2013. *La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía*, TEPIF, México.

de los Derechos Humanos y la Convención Europea de los Derechos del Hombre (Salazar, 2013: 46).

Desde mi postura feminista, no dejaré de mencionar lo criticable que son los nombres de algunos de estos documentos cuando nominalmente y de facto, se refieren específicamente a los derechos del hombre, sin embargo, desde el siglo XVII ya existían documentos que demandaban la igualdad política entre hombres y mujeres, entre los cuales destacan: *De la igualdad entre los hombres y las mujeres*, de Marie de Gournay y escrito en 1622; *De la igualdad de los sexos* en 1673 y *La excelencia de los hombres contra la igualdad de las mujeres* en 1675, ambos de François Poulain de la Barre; posteriormente, en el siglo XVIII, la contundente *Declaración de los Derechos de la mujer y la ciudadana* de Olympe de Gouges; y *Vindicación de los derechos de la mujer*, escrita por Mary Wollstonecraft en 1792.

Actualmente, en muchos documentos internacionales y en las instituciones del Estado sigue el lío con respecto del lenguaje excluyente y con la exclusión real de las mujeres. El escenario es sumamente complejo y por desgracia los derechos fundamentales de las mujeres se encuentran constantemente amenazados, en consecuencia, son necesarias su exigencia, su garantía, su vigilancia e incluso su defensa también de forma constante.

La importancia de analizar y de proponer la democracia constitucional como alternativa radica en el planteamiento de rutas críticas sobre la exigibilidad de los derechos políticos electorales de las mujeres, y de cualquier otro derecho fundamental. El vínculo entre democracia constitucional y derechos político-electorales de las mujeres, son necesarios para la consolidación y funcionamiento de dicho sistema político.

La propuesta de democracia constitucional que retomo de Pedro Salazar Ugarte señala que para que el poder político sea legítimo deberá estar fundado en el consenso de los individuos, por ello, mientras las mujeres no formen parte de una manera más equitativa en el consenso para integrar el poder político, éste carecerá de legitimidad.

En este modelo destacan dos ideales: 1) busca establecer el contenido de las decisiones, es decir: qué cosa es legítimo o no es legítimo decidir; 2) busca establecer las formas en que las decisiones son adoptadas, es decir: establecer quién y cómo está autorizado para adoptar decisiones legítimas. En conjunto, la democracia constitucional

puede definirse como: El régimen (o forma de gobierno) donde el ejercicio del poder de decisión colectiva se encuentra formal y materialmente limitado (Salazar, 2013: 48-57).

Con base en lo anterior, puede sugerirse que su primer ideal responde al componente del constitucionalismo, mientras que el segundo, al de la democracia. Con respecto al primer aspecto, considero específicamente la garantía del derecho político de las mujeres a ser votadas, mientras que en el segundo analizo cómo a partir de dicha garantía las mujeres pueden ser parte de la función legislativa.

Con base en lo anterior, las medidas de paridad jurídico-electoral tienen una función dual, por un lado, la democracia emplea este mecanismo para garantizar el derecho político de las mujeres a ser votadas; y por el otro, en tanto derechos políticos, son al mismo tiempo un límite constitucional al poder político que se ha caracterizado por ser profundamente androcrático, por lo tanto, en una especie de relación dialéctica, los derechos políticos de las mujeres deben potenciarse tanto democráticamente como constitucionalmente.

La paridad electoral es un camino que ha dejado valiosos resultados, no obstante, como mostrare a continuación, los partidos políticos encuentran mecanismos para minimizar la presencia de las mujeres sin vulnerar la ley electoral, en consecuencia, resulta indispensable subsanar los huecos legales y analizar la incidencia del sistema electoral para potenciar las candidaturas de las mujeres por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional para lograr una elección equitativa con respecto de los candidatos.

3. PARIDAD JURÍDICO-ELECTORAL Y SISTEMA ELECTORAL: CAMBIOS CUANTITATIVOS EN EL ÁMBITO FEDERAL

Las elecciones efectuadas el 7 de junio de 2015 son trascendentales porque pusieron a prueba la reforma político electoral aprobada en 2014 que trajo consigo nuevas leyes electorales: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), y con ellas, el advenimiento de la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas con carácter obligatorio para todos los partidos políticos.

A continuación, mostrare en términos numéricos si hubo un incremento considerable de mujeres con la implementación de dicha norma en comparación con la última cuota de género que era de 60 % - 40 % establecida en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).¹² El análisis se realizará en el ámbito Federal comparando la LXII Legislatura con la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, mismas que corresponden a los periodos 2012-2015 y 2015-2018 respectivamente.

En las elecciones de 2015 fue obligatoria la paridad jurídico-electoral en el registro de candidaturas, esto implicó una coyuntura trascendental en el sistema electoral mexicano porque aparece por primera ocasión el concepto de paridad como obligatoria para los partidos políticos. Las mujeres ganaron con la norma una batalla en su beneficio para acceder a los puestos de representación política, pero que, como se verá, será necesario perfeccionar debido a las características de este sistema electoral mexicano.

A partir de lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estipula que “es derecho de *los* ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular” y que “los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal” (LGIPE artículo 7, numeral 1 y artículo 232, numeral 2: 2014). Como resultado de las elecciones federales intermedias del 7 de junio de 2015, se renovó la Cámara de Diputados con 500 legisladoras y legisladores (300 a partir del principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional).

¹² En noviembre de 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados, cuyos aspectos más relevantes fueron: 1) que los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios de un mismo género, en el caso del principio de mayoría relativa; 2) las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto de manera alternada y; 3) que de la totalidad de solicitudes de registro, por ambos principios tanto de diputados como de senadores, al menos 40% de las candidaturas deben integrar fórmulas completas, es decir, propietario y suplente de un mismo género. Dicha sentencia fue un mecanismo para obligar a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género establecida por el Cofipe. Véase: *Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados*. Disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-2011%20y%20acumulados.pdf> (20/03/ 2016).

En lo que concierne a la integración de la LXII Legislatura (2012-2015), antes de la ley de paridad aprobada en 2014, la Cámara de Diputados inició su ejercicio constitucional con 315 hombres y 185 mujeres,¹³ que representaban 63 % y 37 % respectivamente. Ahora bien, el resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 y con la puesta en práctica de la paridad electoral, la LXIII Legislatura de la Cámara quedó configurada con 287 hombres y 213 mujeres, que representan 57.4 % y 42.6 %.¹⁴

En términos reales aumentaron 28 mujeres en la Cámara a pesar de la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas, no obstante, estos avances merecen un análisis más minucioso para encontrar por medio de qué principio de elección lograron acceder mayoritariamente a un lugar como diputadas. Lo anterior, con la finalidad de encontrar los alcances y limitaciones de la paridad jurídico-electoral.

Al considerarse la asignación de curules (a partir de dos principios: el de mayoría relativa y el de representación proporcional), lo importante será analizar si existieron modificaciones en cuanto al triunfo de mujeres por el principio de mayoría relativa. Éste es significativo porque la curul en la Cámara de Diputados será para quien haya obtenido más votos en cada uno de los 300 distritos electorales que configuran la cartografía electoral.

Los resultados son más alentadores cuando hay un análisis únicamente del principio de mayoría relativa, pues en la LXII Legislatura 91 mujeres ganaron por ese principio, mientras que en la LXIII Legislatura el dato ascendió a 118 porque las mujeres ganaron 27 distritos más. El incremento por medio de este principio es muy importante porque muestra los pequeños, pero significativos avances de la paridad electoral: revela una mayor eficacia para que los partidos políticos cumplan con la obligatoriedad de garantizar la paridad en las candidaturas y son útiles para transformar los referentes simbólicos acerca de quiénes pueden acceder al espacio de la política formal a partir del ejercicio de sus derechos políticos. En las democracias actuales uno de los principales déficits radica en la distancia

¹³ Véase: Memoria del Proceso Electoral Federal 2011-2012. Capítulo 16. Resultados electorales y validez de las elecciones. Disponible en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/ProcesosElecttorales/ProcesoElectoral2011-2012/Proceso2012_docs/memoriasPEF2011-2012/23_Capitulo_16.pdf (20/03/2016).

¹⁴ Los datos de la LXII y la LXIII Legislaturas corresponden al Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. Disponible en <http://siceef.ine.mx/diputadosps.html> (08/04/2017).

existente entre establecer la igualdad de derechos políticos en la ley y garantizarlos efectivamente.

En contraste, los hombres pasaron de una legislatura a otra de 209 lugares a 182. Sin embargo, en la legislatura actual, es amplia la brecha existente entre 118 lugares que obtuvieron las mujeres y los 182 de los hombres por el mismo principio, existe una diferencia de 64 lugares, por lo tanto, se sugiere como una de las posibles causas que sea en los partidos políticos donde persiste el lastre androcéntrico de colocarlas en distritos donde si bien, no tienen los porcentajes de votación más bajos como señala la Ley General de Partidos Políticos, tampoco tienen posibilidades reales de triunfo, evitando así faltar a la norma.

En lo que refiere al principio de representación proporcional, los partidos políticos presentaron sus listas de forma alternada entre un hombre y una mujer para cumplir con el principio de paridad establecido en la ley.¹⁵ La LGIPE en su Capítulo III concerniente al procedimiento para el registro de candidaturas establece que: “Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada uno por un propietario y un suplente de mismo *género*, y se alternarán las fórmulas de distinto *género* para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista” (LGIPE, artículo 234, numeral 1: 2014).

En la Legislatura anterior (LXII), 94 mujeres ganaron por el principio de representación proporcional, mientras que, en la Legislatura actual, el dato aumentó a 95, sin embargo, como lo hemos planteado más arriba, esta modificación es aceptable porque el incremento de las mujeres en la Cámara de Diputados se conquistó principalmente por medio del principio de mayoría relativa. En el caso de los hombres, perdieron un lugar a partir de este principio.

Este hallazgo no es menor, vale la pena recordar que no sólo en la LXII Legislatura, sino en todas las anteriores, la llegada de las mujeres políticas a la Cámara era más factiblemente por el principio de representación proporcional, es decir, los partidos políticos entregaban las listas con la cuota de género establecida, pero estas instituciones en

¹⁵ La alternancia en las listas del principio de representación proporcional tiene su genealogía en la *Sentencia SUP JDC 12624/2011*, pero ahora son constitutivas y obligatorias de la LGIPE y de la LGPP.

realidad no estaban obligadas a potenciar las candidaturas de las mujeres porque, como la posibilidad de ser legisladora era por medio de dichas listas, no era necesario que las mujeres realizaran campaña electoral porque no existía disputa con otros candidatos por el triunfo de uno de los 300 distritos electorales.

La Ley electoral establece la alternancia entre hombres y mujeres en las listas plurinominales, pero de las cinco listas (una para cada circunscripción) que entregó cada partido político,¹⁶ es decir: de un total de 50 listas, sólo seis iniciaban con el nombre de una mujer, por ende, el primer lugar que cada partido ganó por el principio de representación proporcional estuvo destinado en su mayoría para ser ocupado por un hombre.¹⁷ Con este dato puede explicarse por qué en este principio la modificación no fue tan amplia, pues también es un hecho repetido que los partidos políticos siempre han protegido y asignado los primeros lugares para los hombres.

En suma, es posible ver cómo en los huecos de la Ley electoral los partidos políticos siguen encontrando cómo priorizar los lugares en la Cámara para los hombres, incluso, los partidos pequeños que pueden asegurar 1 o 3 lugares en cada circunscripción favorecerá la presencia de hombres.

No obstante, a pesar de los desafíos que aún faltan por librar, lo cierto es que la obligatoriedad de la paridad electoral afecta la asignación de curules en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, existe un impacto en el sistema electoral, entendido a éste como uno de los subsistemas que integran al sistema político y que se encuentra conformado por un conjunto de reglas y procedimientos que permiten expresar la preferencia de los electores, convirtiendo los votos en escaños o cargos de gobierno (Valdés, 2013; Larrosa, 2007; Nohlen, 1994).

Ahora bien, si por sistema político entendemos una serie de subsistemas que interactúan de forma interdependiente, aunque no necesariamente de manera armónica ni

¹⁶ Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Político MORENA, Partido Encuentro Social (PES) y Partido Humanista.

¹⁷ Véase: “Listado de Candidatos (Mayoría Relativa)”. Disponible en <http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPolíticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/Listas> (10/03/2016).

estable; en consecuencia, la modificación en el sistema electoral favorece un cambio en el reparto del poder político, transformando inevitablemente el sistema político.

Con la modificación del sistema electoral por medio de la obligatoriedad jurídica de la paridad electoral podemos sugerir también una posible transformación de índole sociocultural al modificar los referentes simbólicos de quiénes pueden y deben acceder al poder político. En este sentido, Alda Facio señala que “El Derecho a pesar de ser un obstáculo para el desarrollo humano de la personalidad femenina, puede ser un instrumento de cambios estructurales, culturales y personales, lo cual necesariamente llevará, a largo plazo, a un mejoramiento en las condiciones en que vivimos las mujeres” (Facio, 1992: 16).

4. ¿EXTENDER LA PARIDAD EN EL EJERCICIO LEGISLATIVO?

Este apartado profundiza sobre los efectos cuantitativos de la paridad jurídico-electoral. Con base en el incremento numérico de las mujeres resultado de dicho mecanismo, se reflexionará sobre la presencia de las mujeres en las comisiones de la Cámara de Diputados. Desde un aspecto más cualitativo, pero sin dejar a un lado la parte numérica, analizo dónde están las mujeres, es decir: cuántas y cuáles son las comisiones que presiden, en contraste con los hombres. A partir de la relación anterior, busco explicar, desde la categoría de género, cómo es posible que la presencia de mujeres sea considerablemente mayor a la de hombres y viceversa en algunas comisiones.

De acuerdo a los resultados que a continuación presentare, busco evidenciar la cultura política imperante en nuestro país: el desfase en relación con algunos avances jurídicos y la estructura interna de las instituciones del Estado donde persiste un sistema androcrático. En consecuencia, sostengo que si a partir de medidas jurídicas es posible cambiar o por lo menos incidir en la cultura y en las percepciones de los lugares que socialmente ocupan o deberían ocupar las mujeres y los hombres, quizá sea momento de empezar a exigir la paridad más allá de las candidaturas electorales porque también es necesaria para configurar las comisiones de la Cámara de Diputados.

Advirtiendo críticas a los efectos que puede traer la paridad, no basta con equilibrar el mismo número de mujeres y hombres, sino la eliminación de las fronteras con respecto

de los temas o los problemas concebidos como exclusivos de mujeres u hombres. Se requiere acabar con la idea de que las mujeres poseen “naturalmente” ciertas cualidades para entender y atender sólo algunos temas de las agendas legislativas, esta forma de pensar es producto del viejo, pero vigente, argumento esencialista para excluir a las mujeres de temas dónde no sólo pueden, sino deben participar.

Con base en lo estipulado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se define qué es una comisión y se establece la cantidad y los temas de las comisiones ordinarias; éstas quedarían definidas como: “los órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales” (LOCGEUM, artículo 39, numeral 1 y 2: 2017). También estipula la creación de 52 comisiones ordinarias y prevé la existencia de comisiones de Investigación y comisiones especiales en los artículos 41 y 42 de la referida Ley respectivamente. En artículos subsecuentes hasta el 45, se detallan características específicas de algunas comisiones como el establecimiento en algunos casos del máximo de integrantes o de presencia partidista en ellas, además señala, en lo general, las atribuciones y obligaciones de sus miembros.

El 30 de septiembre de 2015, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó la integración de 56 comisiones ordinarias, el Boletín N°0116 donde se detalla dicho acontecimiento, sólo señala el total de comisiones que presidirá cada grupo parlamentario señalando que: el PRI, 23; el PAN, 12; el PRD, siete; el PVEM, cinco; Morena, cuatro; MC, tres; y el Panal y el PES, una respectivamente. Como es de esperarse, el Boletín nunca hace referencia a su integración en función de hombres y mujeres y, por si fuera poco, tampoco importa ese dato en el Álbum de Integración de comisiones de la LXIII legislatura.¹⁸

Por ello, mostrare que ese dato es relevante desde una perspectiva demócrata feminista porque permite visibilizar dónde están las mujeres en esta legislatura a partir de la paridad jurídico-electoral en las candidaturas para evidenciar la existencia de un avance considerable; pero el camino de la paridad debe, paradójicamente, extenderse al interior de

¹⁸ La información proporcionada para el análisis de este apartado corresponde al Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura durante su segundo año de ejercicio constitucional, actualizado al 10 de julio de 2017. Disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_comisiones_tc.pdf (12/07/2017).

la Cámara, en específico, dentro de las comisiones, para realizar de esta manera el ejercicio de ser una legisladora con las mismas oportunidades que los hombres.

Para el análisis de este apartado, he considerado sólo a las 56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura. Del total de las 56 comisiones ordinarias, los hombres presiden 39 y las mujeres sólo 17, esto da como resultado 70 % y 30 % respectivamente. La inevitable pregunta es ¿por qué existen tan pocas mujeres como presidentas de las comisiones? Desde luego, no es una falta de capacidad,¹⁹ sino la muestra inamovible de una institución con privilegios de sus espacios para los hombres.

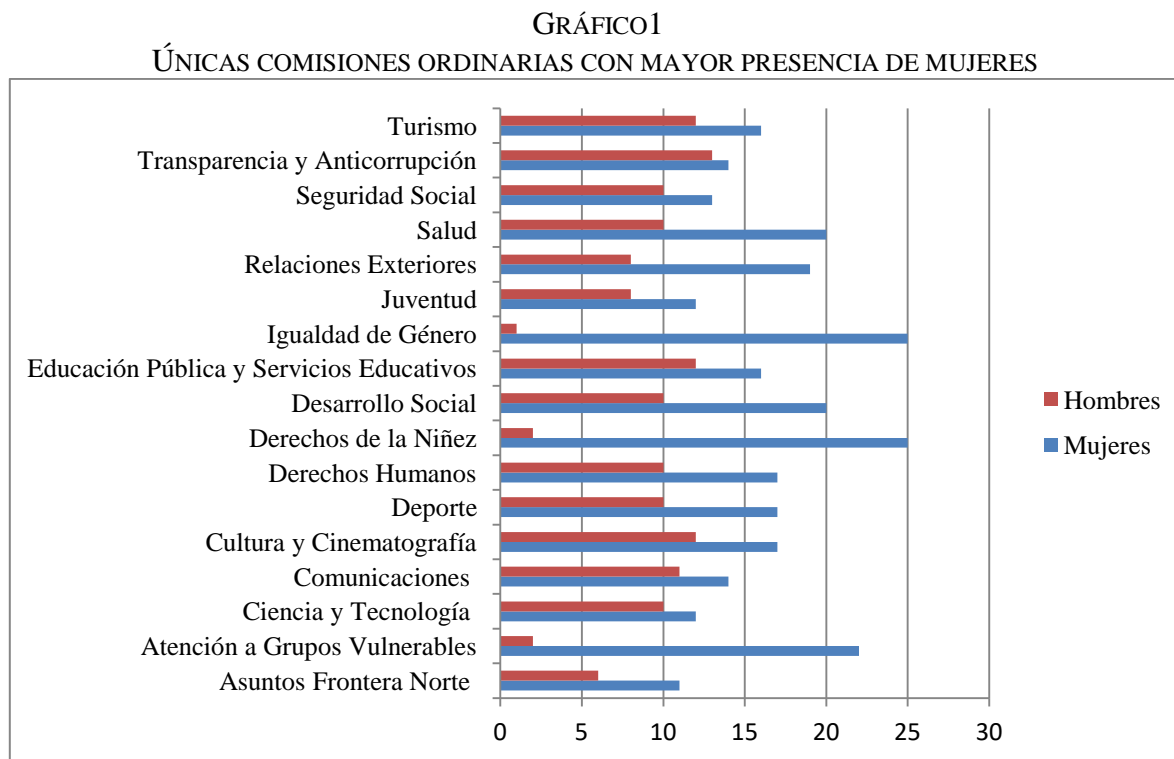
Una vez puesta en evidencia esta primera desigualdad, la sospecha se traslada a un espacio de análisis de otra índole que trasciende los números, esto conlleva a la segunda parte de la reflexión: ¿qué temas tratan las comisiones que presiden las mujeres? Incluso, al sopesar los números y los temas, fue interesante analizar cuáles son las comisiones con mayor presencia de mujeres y, de igual forma, cuáles tienen mayor presencia de hombres.

De las 17 comisiones ordinarias que presiden mujeres, sólo seis tienen una mayor presencia de mujeres respecto de sus integrantes:²⁰ Comunicaciones; Educación Pública y Servicios Educativos; Igualdad de Género; Juventud; Seguridad Social; y Turismo. La mayor presencia de hombres está en 11 y ninguna tiene una representación paritaria. En el mismo sentido, de las 39 comisiones ordinarias que presiden los hombres, 26 de ellas tienen mayor presencia de hombres, 11 tienen mayor presencia de mujeres y las comisiones de Población y la de Seguridad Pública tienen una representación paritaria. A partir de estos datos, quien presida las comisiones no será asunto menor: la configuración está muy alejada de la representación paritaria, sin embargo, el análisis requiere ser más minucioso para mirar qué tan amplia logra ser la representación de mujeres y de hombres en determinadas comisiones y encontrar las afinidades de una lógica en la que la categoría de género resulta ser la actora principal.

¹⁹ Teresita de Barbieri demuestra con base en un análisis sobre las características sociodemográficas de las y los diputados de la LVII Legislatura que, aunque las trayectorias de participación política son más reducidas para las diputadas, cuatro de cada cinco legisladores (hombres y mujeres) tenían algún antecedente de participación política. Véase: Teresita de Barbieri. 2003. *Género en el trabajo parlamentario: la legislatura mexicana a finales del siglo XX*, Buenos Aires: CLACSO.

²⁰ Este dato se obtuvo a partir de la suma de las personas que conforman la secretaría más los integrantes de cada comisión.

A continuación, presento un gráfico de las únicas comisiones ordinarias (17 de 56), con una mayor presencia de mujeres para observarse la distancia abismal entre sus integrantes mujeres y hombres (Ver gráfico 1).



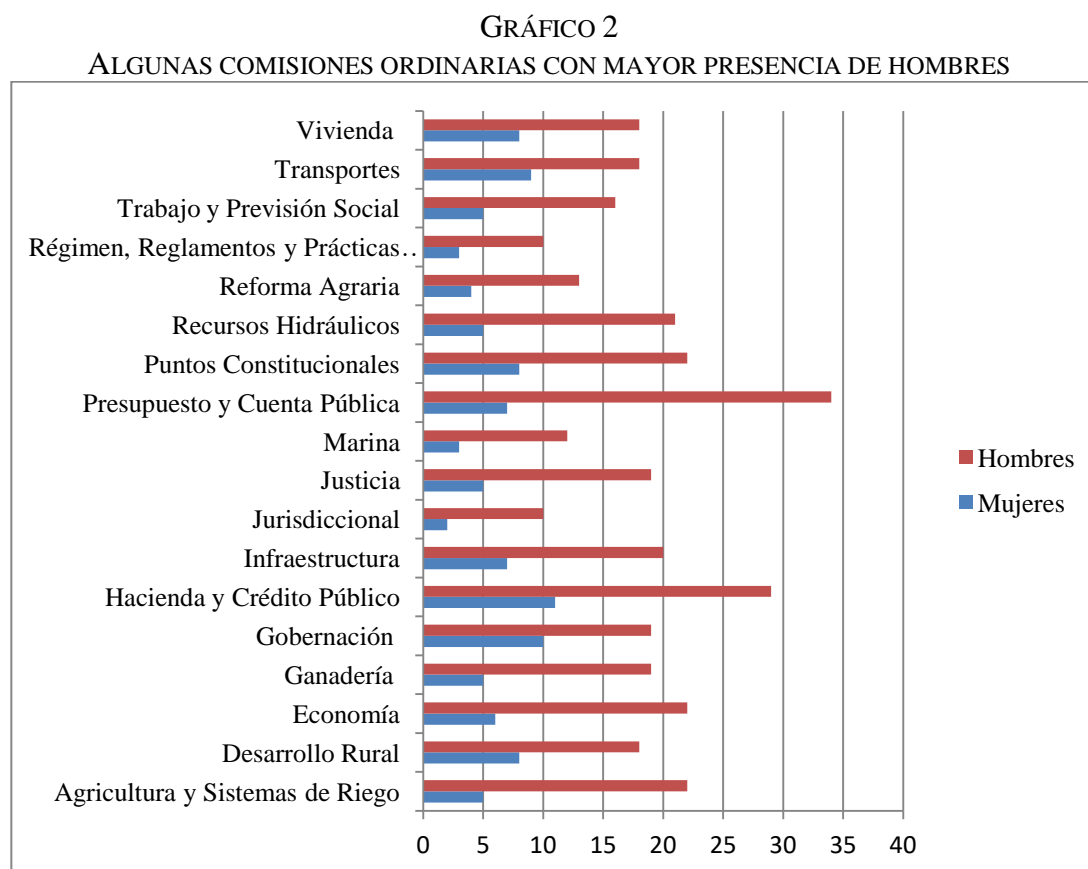
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura, actualizado al 10 de julio de 2017.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, resaltan tres comisiones por la amplia distancia entre mujeres y hombres: Atención a grupos vulnerables, Derechos de la Niñez e Igualdad de Género. En datos concretos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables tiene en total 22 mujeres y dos hombres; la Comisión de Derechos de la Niñez, 25 mujeres y dos hombres; y la Comisión de Igualdad de Género, 23 mujeres y un hombre. La pregunta es ¿qué tienen en común estas comisiones para que concentren muchas más mujeres que hombres?

Dos reflexiones surgen con estos datos: 1) el cuidado todavía es concebido como responsabilidad exclusiva de las mujeres, en este caso, reflejado en los grupos vulnerables y en la niñez y, 2) el género se entiende en las instituciones, por desgracia, como sinónimo de mujeres y no como una categoría para analizar la desigualdad social existente entre

hombres y mujeres, al reformularse esta idea permitiría diseñar políticas públicas que garanticen derechos en condiciones más equitativas.

Ahora bien, ¿en qué comisiones ordinarias está la mayor presencia de hombres en la Cámara de Diputados? Para presentar el siguiente gráfico, seleccione sólo 18 de las 39 comisiones que tienen una mayor presencia de hombres (Ver gráfico 2).



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Álbum de Integración de Comisiones de la LXIII Legislatura, actualizado al 10 de julio de 2017.

Este gráfico es desalentador y resulta difícil seleccionar los casos más significativos porque, en la mayoría, la diferencia entre hombres al interior de cada comisión es de más de la mitad, sin embargo, destaco por lo menos siete comisiones que muestran en primera instancia la exclusión de las mujeres en estos temas: Presupuesto y Cuenta Pública; Hacienda y Crédito Público; Economía; Jurisdiccional; Justicia; Trabajo y Previsión Social; y Vivienda.

En la integración de las comisiones antes mencionadas es visible la triangulación poder-dinero-hombres, esto hace recordar la exclusividad de los hombres en dichos temas para pensarlos y resolverlos, el resultado evidencia, al mismo tiempo, que al interior de la Cámara de Diputados prevalece la dicotomía en los temas públicos y privados.

Más allá de los problemas que la paridad jurídico electoral tiene que resolver en sí misma, el termino de paridad debe pensarse al momento de estructurar las comisiones porque la participación de las mujeres es necesaria en la discusión de todos los problemas nacionales, no basta con reducir su función como legisladora a un voto en el pleno de la Cámara para aprobar o no determinados acuerdos, es necesaria incorporarlas en la discusión al interior de las comisiones pues aquí se produce el primer tamiz de las voces que serán escuchadas y donde se generan propuestas.

Debemos tratar de construir una cultura política basada en la “equifonía”, es decir, donde la voz de las mujeres sea tan legítima como la de los hombres dado que ambas están dotadas de razón, es la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado. Implica diálogo, ser interlocutoras y para ello, es menester el acceso a los espacios donde los discursos se escuchan y discuten (Lagarde, 1997; Santa, 1992).

El análisis del espacio de dónde surgió una de las reformas jurídicas que más esperaban algunas feministas interesadas en temas electorales deviene de la desconfianza de la buena voluntad por garantizar derechos políticos a las mujeres en un sistema democrático: la mayoría de los derechos se han logrado por medio de la lucha política.

Como se puede apreciar, en algunas comisiones es visible la postura hegemónica de lo que pueden y deben hacer o encargarse las mujeres y los hombres, de tal suerte, desempeñar el papel como legisladora o legislador no lo exime de las estructuras de género existentes en las diferentes instituciones sociales.

La presencia de las mujeres en puestos de poder político empieza a ser un referente distinto sobre las actividades que pueden y deben desempeñar, sencillamente porque tienen el derecho de hacerlo, no obstante, la lucha por el actuar de las mujeres políticas en estos espacios de poder va más allá de acceder a una curul, pues los espacios de poder político todavía son profundamente androcráticos.

CONCLUSIONES

La democracia constitucional entendida como un modelo de organización política-jurídica enfrenta, principalmente en su dimensión sociopolítica, el peso de una prevaleciente cultura androcrática, misma que es visible en la falta de garantía en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

De acuerdo con el modelo de democracia constitucional planteado en esta investigación, se ha mostrado que los derechos fundamentales constituyen la base de dicho modelo y representan, al mismo tiempo, los límites al poder político. Por tanto, el uso de acciones afirmativas para potenciar la presencia de las mujeres en los puestos de elección popular pone de manifiesto uno de los rezagos en su dimensión socio-política: la falta de garantía en condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre los ciudadanos y las ciudadanas. Como resultado, al ser vulnerados los derechos políticos de las mujeres, la democracia constitucional ha recurrido a su dimensión jurídica por medio de la paridad electoral para subsanar sus deficiencias sociopolíticas, sin embargo, los efectos benevolentes de dicha ley no han logrado llegar de la misma manera en los tres niveles de gobierno, incluso, en los tres poderes de gobierno también hace falta impulsar leyes paritarias.

En el desarrollo de este trabajo se mostró que el lento y paulatino acceso de las mujeres a los puestos de representación política fue gracias a las modificaciones jurídicas, sin embargo, estas últimas no serían posibles sin la lucha política que el movimiento feminista ha emprendido en la historia, con el objetivo de que sus derechos (en este caso, sus derechos políticos), no sólo sean reconocidos constitucionalmente, sino que también sean materializados.

La lucha por la paridad electoral en México ha dejado atrás el sinuoso camino que inició con las cuotas de género, sin embargo, la paridad es un nuevo punto de partida para continuar la exigencia en el cumplimiento de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

Respecto al análisis empírico y comparativo de las Legislaturas Federales proporcionado en esta investigación, con la obligatoriedad de la paridad electoral a partir de las elecciones Federales de 2015, reveló que en el ámbito Federal, de la LXII a la LXIII

Legislatura, las mujeres incrementaron su presencia por medio del principio de mayoría relativa, en consecuencia, resulta importante darle seguimiento al vínculo entre paridad y sistema electoral mexicano, pues además de analizar cómo fluctúa o permanece la presencia de hombres y mujeres a causa de los principios de mayoría relativa y representación proporcional, también es necesario evidenciar los mecanismos que emplean los partidos políticos para asegurar más lugares a los candidatos sin violentar la ley electoral.

La categoría de paridad en esta investigación se analizó en dos aspectos: uno que corresponde específicamente a los procedimientos y otro que atiende a una cuestión sociocultural. La cultura política entendida como el sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de una población hacia los objetos políticos, es decir, el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder (Almond y Verba, 1992; Peschard, 2012), parece en ciertos momentos un desfase abismal de ciertos avances jurídicos, como resultado, reitero que en ocasiones resulta en apariencia más sencillo transformar una ley que la cultura.

Con base en el análisis presentado en esta investigación sobre la integración de las comisiones respecto a la cantidad de mujeres y hombres en su conformación y la relación de este dato con el tema de cada comisión, es posible afirmar que la cultura androcrática es transgredida con la paridad electoral, no obstante, al interior de la Cámara de Diputados es abrumadora la desigualdad que existe entre algunos de los temas de las comisiones y la presencia de hombres y mujeres en ellas, esto permite ver un reflejo de lo que acontece en casi todos los espacios de la vida social.

Las mujeres deben estar en los puestos de representación política porque es su derecho, su incremento no implica hacer una mejor política, axiológicamente hablando, por el simple hecho de ser mujeres, pensar eso sería regresarlas a una concepción no sólo esencialista, sino también falsamente virtuosa.

Indiscutiblemente, hace falta legislar con un enfoque feminista, es decir, con una forma verdadera que busque reducir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, de lo contrario, seguirá la expectativa de coyunturas políticas que permitan pequeños cambios en beneficio de unas y otros. Siguiendo a Anne Phillips “no se trata de que haya

más mujeres en la política, sino de la oportunidad de transformar el terreno político” (Phillips, 1996: 16), es decir, de transformar los referentes simbólicos de quienes pueden y deben acceder a la política.

En suma, el modelo de democracia constitucional propone alternativas para criticar y mostrar que el desfase entre la dimensión teórica y la dimensión sociopolítica continuará si no son garantizados a las mujeres el ejercicio de sus derechos fundamentales, específicamente para este caso, sus derechos políticos, como resultado, mostrará que, no es que no exista la democracia en tanto forma de gobierno, sino que evidencia la lamentablemente hostilidad para la consolidación de una democracia constitucional deseable que asegure de manera igualitaria, real y efectiva los derechos de las personas, sean estos políticos, civiles o sociales.

Indudablemente, considero que es urgente la extensión de la paridad más allá de sus límites electorales, para transformar, en la manera posible, las estructuras socioculturales y erradicar la falsa idea construida e imperante que designa espacios y temas propios, exclusivos y delimitados para hombres y para mujeres.

BIBLIOGRAFÍA

- Almond, Gabriel y Sidney Verba (1992). “La cultura política”, en *Diez textos básicos de Ciencia Política*, Ariel, Barcelona, pp. 171-201.
- Archenti, Nélica y María Inés Tula (2008). *Mujeres y política en América Latina. Sistemas electorales y cuotas de género*, Heliasta, Buenos Aires.
- Barbieri, Teresita (2003). *Género en el trabajo parlamentario: la legislatura mexicana a finales del siglo xx*, Clacso, Buenos Aires.
- Bobbio, Norberto (2009). *Teoría general de la política*, 3ª ed, Trotta, Madrid.
- Bovero, Michelangelo (2013). *La protección supranacional de los derechos fundamentales y la ciudadanía*, TEPJF, México.
- Cazés, Daniel (2007). *Obras feministas de François Poulain de la Barre (1747-1723): estudio preliminar*, UNAM-CEIICH, México.
- De Gournay, Marie (2014). *Escritos sobre la igualdad y en defensa de las mujeres*, (Montserrat Cabré i Pairet y Esther Rubio Herráez, Trans.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
- Ernesto, Gustavo y Alejandro Favella (2007). “Democracia vs. Autoritarismo”, en *Tratado de Ciencia Política*, Gustavo Ernesto y Víctor Alarcón (coords.), Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, pp.111-113.
- Fernández, Ana, (comp.), (1995). *Participación política de las mujeres en México al final del milenio*, El Colegio de México, México.
- (2003). *La política, la sociedad y las mujeres*, Instituto Nacional de las Mujeres-Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México.
- (2011). “Las cuotas de género y la representación política femenina en América Latina”, en *Argumentos*, vol. 24, núm. 66, México, pp. 247-274.
- García, Silvia (2011). “Evaluar la ciudadanía: impacto del sistema electoral en la representación política de las mujeres en el ámbito legislativo. Estudio de cinco legislaturas en el Estado de México”, en *Mujeres y ciudadanía en México: Estudios de caso*, Mónica Cejas y Ana Lau Jaiven (coords.), Itaca, México, pp. 275-311
- Lagarde, Marcela (1997). *Claves feministas para el poderío y autonomía de las mujeres (Memoria)*, Puntos de Encuentro, Managua.

- Larrosa, Manuel (2007). “Partidos políticos, sistema electoral y sistema de partidos”, en *Tratado de Ciencia Política*, Gustavo Ernesto y Víctor Alarcón (coords.), Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, pp. 193-213.
- Lau, Ana (2011). “Abriendo espacios de participación ciudadana para las mujeres: el sufragio femenino en México”, en *En la encrucijada de género y ciudadanía: sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción política*, Mónica Cejas y Ana Lau Jaiven (coords.), Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, pp. 25-56.
- Nohlen, Dieter (1994). *Sistemas Electorales y Partidos Políticos*, Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, México.
- Palma, Esperanza (2012). “Candidaturas femeninas y reclutamiento legislativo en México: el impacto de las cuotas de género en la composición de la LXI legislatura”, en *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, Estela Serret (coord.), Suprema Corte de Justicia de la Nación-Fontamara, México, pp. 121-145.
- (2014). “Diputadas y senadoras en las LXI y LXII Legislaturas: El impacto de la cuota de género en México”, en *Instituciones, participación y Representación políticas en México*, Víctor Alarcón y Esperanza Palma (coords.), Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-Tirant lo Blanch, México, pp. 86-120.
- Pateman, Carole (1996). *Críticas feministas a la dicotomía público/privado*, Paidós, Barcelona.
- Phillips, Anne (1996). *Género y teoría democrática*, Universidad Nacional Autónoma de México-IIS-Programa Universitario de Estudios de Género, México.
- Salazar, Luis (2007). *Educación. Discriminación y tolerancia*, Alianza, México.
- Salazar, Pedro (2013). *La democracia Constitucional*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Sazbón, José (2007), *Cuatro mujeres en la Revolución Francesa*, Biblos, Buenos Aires.
- Scott, Joan (2012). “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en *El género la construcción cultural de la diferencia sexual*, Marta Lamas (comp.), 4^a Reimpresión, Universidad Nacional Autónoma de México-IIS-Programa Universitario de Estudios de Género-Porrúa, México, pp. 265-302.

- Tarrés, María Luisa (2011). “Para un debate sobre ciudadanía y género en el contexto mexicano (2000-2010)”, en *En la encrucijada de género y ciudadanía: sujetos políticos, derechos, gobierno, nación y acción política*, Mónica Cejas y Ana Lau Jaiven (coords.), Itaca, México, pp. 57-84.
- Torres Falcón, Marta (2012). “El principio de igualdad y las acciones afirmativas. Un análisis desde los derechos humanos”, en *Democracia y ciudadanía: perspectivas críticas feministas*, Estela Serret (coord.), Suprema Corte de Justicia de la Nación-Fontamara, México, 93-120.
- Wollstonecraft, Mary (2013), *Vindicación de los derechos de la mujer* (Marta Lois González, Trad.), Taurus, México.

ARTÍCULOS EN LÍNEA

- Archenti, Nélica y María Inés Tula (2014). “Cambios normativos y equidad de género. De las cuotas a la paridad en América Latina: Los casos de Bolivia y Ecuador”. *América Latina Hoy*, núm. 66, (enero-junio): pp. 47-68, disponible en <http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh2014664768/12134> (16/06/2017).
- Facio, Alda (1992). *Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal)*, ILANUD, San José, Costa Rica, disponible en http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/1_Alda%20facio_Cuando_el_gen_suena_cambios_trae.pdf (03/06/2016).
- Peschard, Jacqueline (2012). *La cultura política democrática*. Instituto Federal Electoral, disponible en http://www2.ine.mx/documentos/DECEYEC/la_cultura_politica_democratica.htm (01/07/2016).
- Santa Cruz, Isabel (1992). “Sobre el concepto de igualdad: algunas observaciones”. *Isegoría*, núm. 6: pp. 145-152, disponible en

<http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewFile/329/330>
(30/11/2016).

Valdés, Leonardo 2013. *Sistemas electorales y de partidos*. Instituto Federal Electoral, disponible en http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosDivulgacion/2015/cuad_7.pdf (03/03/2016).

SENTENCIAS

Sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados. Actor: María Elena Chapa y otras. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en <http://ius.scjn.gob.mx/IusElectoral/Documentos/Sentencias/SUP-JDC-12624-2011%20y%20acumulados.pdf> (20/03/2016).

LEGISLACIÓN

Cofipe. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (2006). México: Diario Oficial de la Federación, México, D.F., Cámara de Diputados, disponible en http://normateca.ife.org.mx/normanet/files_otros/COFIPE/cofipe.pdf (20/03/2016).

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014). Tomo I. México: Instituto Nacional Electoral-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales-Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

LGIPE. Compendio de Legislación Nacional Electoral (2014). Tomo II. México: Instituto Nacional Electoral-Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales-Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

LOCGEUM. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (1999). México: Diario Oficial de la Federación, México, D.F., Cámara de Diputados,

disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/locg.htm> (16/03/2017).

PÁGINAS WEB

Álbum de integración de Comisiones. LXIII Legislatura. Segundo año de ejercicio constitucional, 2017. Cámara de Diputados, disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_comisiones_tc.pdf (12/07/2017).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura, 2015, “Quedó instalada la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; en su primer año, será presidida por Jesús Zambrano Grijalva”, en *Boletín N° 0002*. Cámara de Diputados, disponible en <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Agosto/29/0002-Quedo-instalada-la-LXIII-Legislatura-de-la-Camara-de-Diputados-en-su-primer-ano-sera-presidida-por-Jesus-Zambrano-Grijalva> (24/09/2015).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIII Legislatura, 2015, “Diputados aprueban constitución de las 56 comisiones ordinarias que funcionarán en la LXIII Legislatura”, en *Boletín N° 0116*. Cámara de Diputados, disponible en <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Septiembre/30/0116-Diputados-aprueban-constitucion-de-las-56-comisiones-ordinarias-que-funcionaran-en-la-LXIII-Legislatura> (17/03/2016).

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 2017, disponible en <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm> (2/07/2017).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016, “Atlas de género”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/ (20/06/2017).

Instituto Nacional Electoral, 2013, Memoria del Proceso Electoral Federal, 2011-2012, “Resultados electorales y validez de las elecciones”. INE, disponible en <http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFEv2/ProcesosElectores/P>

rocesoElectoral20112012/Proceso2012_docs/memoriasPEF20112012/23_Capitulo_16.pdf (20/03/2016).

Instituto Nacional Electoral, 2015, Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales, 2014-2015, “Diputados clasificados por sexo”. INE, disponible en <http://siceef.ine.mx/diputadosps.html> (08/04/2017).

Instituto Nacional Electoral, 2016, “Listado de Candidatos (Mayoría Relativa)”. INE, disponible en <http://www.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/PartidosCandidatosySusCampanias/Candidatos/> (10/03/2016).

Latinobarómetro, 2015, “Grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia”. Latinobarómetro, disponible en <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp> (05/07/2017)